

Apetito desordenado de la jerarquía

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ

El apetito desordenado que viene mostrando la jerarquía de la Iglesia católica en temas de educación parece exigir, ya, un cierto freno. Dicen los obispos que la nueva asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, prevista para el próximo curso académico, es materia tan grave que "no permite posturas pasivas ni acomodaticias". Absolutamente de acuerdo: si la Iglesia católica se opone a que se enseñen los derechos humanos en la escuela y si pretende obligar al Estado a que deje en sus únicas manos la ética, la moral cívica, eso es un asunto muy grave que exige la movilización inmediata de los ciudadanos que no queremos que eso suceda:

Ya es hora de dejar posturas acomodaticias porque la experiencia demuestra que la voracidad de la jerarquía es insaciable. De nada sirve respetar generosamente los derechos que le concede la Constitución porque esa jerarquía no parece dispuesta a respetar, ni tan siquiera cicateramente, los derechos que esa misma Constitución reconoce a la sociedad en su conjunto. Quiere controlar todo lo que tenga que ver con la ética, como si no se tratara de una parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones de los seres humanos, independientemente de sus creencias religiosas o de su agnosticismo, sino que formara parte de la catequesis religiosa y cayera bajo su exclusivo control. Pues no es así, ni puede ser así: el respeto, la tolerancia, el espíritu crítico, la solidaridad son valores dignos de ser fomentados, por muy lejos que estén de los idearios religiosos. Es verdad que son valores laicos. Grandes y esperanzadores valores laicos.

La escuela tiene el derecho, y la obligación, de formar a los alumnos en la convivencia cívica y en los derechos humanos. Si la jerarquía de la Iglesia católica considera que esa enseñanza es incompatible con su ideario, el problema es cómo podemos permitir que explique ese ideario en la escuela pública y a costa del dinero de los contribuyentes. ¿Aceptaremos eliminar de los programas educativos todo lo que sea incompatible con el ideario musulmán, judío, católico, evangelista, baptista? ¿Terminaremos adaptándonos a las teorías creacionistas, para no ofender al ideario religioso de quienes interpretan la Biblia al pie de la letra?

La Iglesia hace un llamamiento a sus fieles para que utilicen todos los medios a su alcance, legítimos, faltaría más, para "defender su libertad de conciencia" y boicotear la educación para la ciudadanía. Resulta extraña esa apelación cuando la jerarquía católica nunca se ha caracterizado por su apasionada defensa de la libertad de conciencia de los no creyentes. ¿Habrá que olvidar que intentó que las leyes del Estado prohibieran lisa y llanamente el divorcio?, ¿que siempre ha pretendido que nadie hable en la escuela de educación sexual ni, por supuesto, de preservativos? El filósofo José Antonio Marina, cristiano, autor de uno de los manuales de la nueva asignatura, se declaraba el otro día asombrado de la reacción de la jerarquía: "¿Quién ha dicho que la escuela no debe formar la conciencia moral? ¿Cómo no enseñar a nuestros alumnos que hay comportamientos justos e injustos? ¿Qué quieren? ¿La neutralidad del sistema educativo?".

Es posible que la jerarquía de la Iglesia terminara conformándose con la eliminación del capítulo de la nueva asignatura en el que se fomentan comportamientos éticos contrarios a la homofobia. Ya se sabe que la doctrina católica tiene predilección por el control de la sexualidad de los seres humanos. Pero aún así, sería miserable por su parte que toda esta movilización y este escándalo estuviera provocado, simplemente, por ese objetivo. Sería miserable que considerara la lucha contra la homofobia ajena a su ideario. En cualquier caso, esa es su decisión. Lo realmente importante, ahora, no es lo que piense la jerarquía de la Iglesia, sino lo que haga el Estado. Lo que sería intolerable sería que el Gobierno de Rodríguez Zapatero aceptara sus argumentos y recortara o alterara la enseñanza obligatoria de los derechos humanos.
solg@elpais.es

El País, 22 de junio de 2007